



**JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO TRANSITORIO DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ**  
**-SECCIÓN SEGUNDA-**

Bogotá D.C., veinticinco (25) de agosto de dos mil veinte (2020).

Expediente: 11001-33-35-026-2018-00241-00  
Demandante: **LYDA ESTHER VALDIRI FLOREZ**  
Demandada: LA NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN  
Litisconsorte: NACIÓN – MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO y OTRO

**NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO**

Auto Interlocutorio No. 305

---

Se tiene que en el asunto de la referencia le resultan aplicables las previsiones contempladas en el Decreto 806 del 4 de junio de 2020 *“Por el cual se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”*, como quiera que al tenor del artículo 624 del Código General del Proceso, las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios, prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir.

El articulado es del siguiente tenor literal:

*“Artículo 624. Modifíquese el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, el cual quedará así Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir.*

*Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones.*

*La competencia para tramitar el proceso se regirá por la legislación vigente en el momento de formulación de la demanda con que se promueva, salvo que la ley elimine dicha autoridad”.*

En esa medida, examinado el expediente, encuentra el Despacho que la parte demandada y los litisconsortes necesarios presentaron escrito de contestación de demanda a través del cual además de oponerse a las pretensiones de esta, formularon

diferentes medios exceptivos, que conforme el artículo 12 del Decreto 806 del 2020, deberán resolverse de forma preliminar.

En efecto, el artículo en mención señala:

**“Artículo 12. Resolución de excepciones en la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.** De las excepciones presentadas se correrá traslado por el término de tres (3) días en la forma regulada en el artículo 110 del Código General del Proceso, o el que lo sustituya. En este término, la parte demandante podrá pronunciarse sobre ellas y, si fuere el caso, subsanar los defectos anotados en las excepciones previas.

**Las excepciones previas se formularán y decidirán según lo regulado en los artículos 100, 101 Y 102 del Código General del Proceso. Cuando se requiera la práctica de pruebas a que se refiere el inciso segundo del artículo 101 del citado código, el juzgador las decretará en el auto que cita a la audiencia inicial, y en el curso de esta las practicará. Allí mismo, resolverá las excepciones previas que requirieron pruebas y estén pendientes de decisión.**

**Las excepciones de cosa juzgada, caducidad, transacción, conciliación, falta de legitimación en la causa y prescripción extintiva. se tramitarán y decidirán en los términos señalados anteriormente.**

*La providencia que resuelva las excepciones mencionadas deberá ser adoptada en primera instancia por el juez. subsección, sección o sala de conocimiento. Contra esta decisión procederá el recurso apelación, el cual será resuelto por la subsección, sección o sala del tribunal o Consejo de Estado. Cuando esta decisión se profiera en única instancia por los tribunales y Consejo de Estado se decidirá por el magistrado ponente y será suplicable”.* (Negrillas fuera de texto).

Previo a resolver las excepciones planteadas, forzoso resulta aclarar a las partes, que en el presente asunto el traslado de las excepciones fue cumplido conforme el artículo 110 del Código General del Proceso en concordancia con el parágrafo 2º del artículo 175 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, por lo que, el requisito se encuentra efectivamente cumplido, antes de la entrada en vigor del Decreto 806 del 2020, lo que impone en consecuencia resolver las mismas, para determinar su procedencia o no.

#### **1. Excepciones propuestas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.**

El apoderado judicial de la cartera ministerial planteó, los siguientes medios exceptivos en el escrito de contestación de la demanda.

##### **.- Cosa juzgada constitucional sobre la legalidad de pagos que no constituyen factor salarial.**

Considera que no resulta de recibo afirmar como se hace en la demanda que es ilegal o que constituya un indebido ejercicio de las competencias del Gobierno Nacional, establecer que la bonificación judicial del Decreto 382 de 2012 constituya únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema de Seguridad Social en Salud, por las razones que se han expuesto y por contar con pleno

respaldo en las sentencias de la H. Corte Constitucional C-279 de 1996, y C-052 de 1992, del Magistrado Fabio Morón Díaz.

Igualmente refiere que la prima especial establecida en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, no tiene carácter salarial, esto es, no se toma como base para liquidar las prestaciones sociales, exceptuando cuando se trate de aportes a Pensión de Jubilación, para lo cual cita la sentencia del Consejo de Estado dictada el 19 de septiembre de 1996, C.P. Clara Forero de Castro.

**- Falta de legitimación material en la causa por pasiva del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.**

Fundamenta la excepción en la necesidad de revisar por parte del juez del cumplimiento de los presupuestos procesales del medio de control respectivo, considerando que la falta de legitimación en la causa por pasiva y activa se encuentren debidamente demostrados.

Citando variados pronunciamientos del H. Consejo de Estado, considera que, en el caso del asunto, no se encuentra demostrada la legitimación en la causa por pasiva del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, pues los actos administrativos que se someten a control de jurisdiccionalidad no fueron expedidos por autoridades pertenecientes a ese organismo y por tanto no se encuentra obligado a defender la legalidad de decisiones respecto de las que no tuvo vínculo de ninguna naturaleza.

Sostiene que, para que exista una eventual condena al Ministerio de Hacienda y Crédito Público es indispensable que los hechos que fundamentan las pretensiones hayan sido generados por la cartera ministerial y tal situación no se evidencia en el presente asunto, por lo que concluye que, se encuentra demostrado que se carece de legitimación en la causa por pasiva habida cuenta que no hubo injerencia en la producción ni de las decisiones demandadas, ni de los fundamentos fácticos que soportan las pretensiones del libelo incoatorio.

Finalmente indica que de las funciones asignadas al Ministerio de Hacienda en el Decreto 4712 del 15 de diciembre de 2008 “Por el cual se modifica la estructura del Ministerio de Hacienda y Crédito Público”, no se evidencia ninguna que pueda satisfacer las pretensiones reclamadas en vía jurisdiccional, por lo que es incuestionable que se carece de competencia para resolver lo pretendido por la parte actora.

Solicita en consecuencia se desvincule, al Ministerio de Hacienda y Crédito Público del proceso.

**- Ineptitud de la demanda por indebida acumulación de pretensiones.**

Sostiene que las pretensiones relacionadas con la inconstitucionalidad del Decreto 382 de 2013, debieron ser resueltas a través de la vía del medio de control de simple nulidad

y no de nulidad y restablecimiento del derecho, con lo que se determina que existe ineptitud de la demanda.

Argumenta que no es posible que no es factible que el Decreto 382 de 2013 sea susceptible de control jurisdiccional por parte del Juez Administrativo, pues le correspondía la competencia al juez competente para resolver la nulidad simple del decreto referido.

**- Pleito pendiente.**

Solicita que, se suspenda el presente proceso, hasta tanto no se resuelvan las demandas que cursan en el Consejo de Estado que se relacionan a continuación:

“

MEDIO DE CONTROL	RADICADO DEL PROCESO	AUTORIDAD QUE CONOCE	MAGISTRADO PONENTE	DEMANDANTE
NULIDAD SIMPLE	11001-03-02-000-2016-00398-00 (4257-16)	Sección Segunda – Sala de lo Contencioso Administrativo –Consejo de Estado	Dr. Carlos Mario Izasa Serrano	Jaime de Jesús García León
NULIDAD SIMPLE	11001-03-02-000-2016-00876-00 (4008-16)	Sección Segunda – Sala de lo Contencioso Administrativo –Consejo de Estado	Dr. Jorge Iván Acuña Arrieta	María Clara Espitia Ramírez
NULIDAD SIMPLE	11001-03-02-000-2018-00050-00 (0163-2018)	Sección Segunda – Sala de lo Contencioso Administrativo –Consejo de Estado	Dr. Henry Joya Pineda	Lianna Yaneth Laiton Díaz
NULIDAD SIMPLE	11001-03-02-000-2018-01072-00 (3845-2018)	Sección Segunda – Sala de lo Contencioso Administrativo –Consejo de Estado	Dr. Pedro Simón Vargas Saénz	Mario William Hernández Muñoz
NULIDAD SIMPLE	11001-03-02-000-2016-01014-00 (4562-2016)	Sección Segunda – Sala de lo Contencioso Administrativo –Consejo de Estado	Dr. Carlos Mario Izasa Serrano	Esperanza Beatriz Bonilla Lozano
NULIDAD SIMPLE	11001-03-02-000-2018-00021-00 (0065-2018)	Sección Segunda – Sala de lo Contencioso Administrativo –Consejo de Estado	Dr. Henry Joya Pineda	César Augusto Ortiz Perdomo

**2. Excepciones planteadas por la Nación - Ministerio de Justicia y del Derecho.**

**- Falta de legitimación material en la causa por pasiva**

Argumenta la excepción al señalar que los actos administrativos no fueron expedidos por esa cartera ministerial y en que dentro de la competencia establecida por la ley a esta entidad, no se encuentra la de resolver reclamaciones salariales de los empleados o funcionarios de la Fiscalía General de la Nación, máxime cuando, la entidad competente para defender la legalidad de los actos aquí acusados, es la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, como quiera que de allí emanan las decisiones que se someten

a control jurisdiccional aunado al hecho jurídico cierto de que cuenta con personería jurídica propia, para acudir al proceso.

Trae en mención varios pronunciamientos del H. Consejo de Estado, para considerar que, en el presente asunto, no se encuentra demostrada la legitimación en la causa por pasiva del Ministerio de Justicia y del Derecho, toda vez que, los actos demandados no fueron expedidos por autoridades pertenecientes a ese organismo, de manera que, no se encuentra obligado a defender la legalidad de decisiones respecto de las que no tuvo vínculo de ninguna naturaleza.

#### **.- Caducidad**

Argumenta que se configura este medio exceptivo, como quiera que la Resolución 2-1184 fue expedida y notificada el 25 de abril de 2016, cuyo término de caducidad inicial ocurrió el 26 de agosto de 2016; radicó la solicitud de conciliación el 29 de agosto de 2016, es decir, vencidos los 4 meses para iniciar el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. Señala que, en gracia de discusión, habiéndose realizado la audiencia de conciliación el 2 de noviembre de 2016, la demanda debió presentarse el 3 de noviembre de 2016, sin embargo, verificado el sistema de consulta de la Rama Judicial, se advierte que la presente demanda fue radicada el 8 de junio de 2018, encontrándose vencido el término de caducidad.

### **3. Excepciones planteadas por la Nación – Fiscalía General de la Nación**

#### **.- Prescripción de los derechos laborales**

Argumentó que, en el evento de acceder a las pretensiones, se de aplicación al art. 2 del Decreto 1848 de 1969, y se declare la prescripción extintiva del derecho, teniendo en cuenta la época de la presentación de la petición en vía administrativa.

#### **.- Caducidad**

Consideró que, el presente asunto se encuentra caducado, por cuanto no corresponde a prestaciones periódicas que puedan ser reclamadas en cualquier tiempo, teniendo en cuenta que: *“el vínculo laboral entre la accionante y la Fiscalía General de la Nación NO PERSISTE, puesto que ya no se (sic) presta el servicio, las prestaciones reclamadas no son un emolumento que retribuye su trabajo habitual por lo que NO CONTINÚA SIENDO UNA PRESTACIÓN PERIÓDICA QUE PUEDA SER DEMANDADA EN CUALQUIER TIEMPO.”*

Precisó que *“la demandante se retiró de la entidad el 8 de agosto de 2017, presentó la petición el 29 de septiembre de 2017 (se notificó el 13 de octubre) el recurso de apelación se presentó el 3 de noviembre (ato (sic) ficto hasta el 3 de febrero), SIENDO LA DEMANDA RADICADA HASTA EL 22 DE OCTUBRE DE 2019, ES DECIR 9 MESES DESPUÉS OPERANDO LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN.”*

Concluyó indicando: “solicito al Señor Juez se decrete la caducidad de las prestaciones reclamadas por la demandante, habida cuenta de que para la época de la radicación de la demanda ya no tenía ningún vínculo laboral activo con la Fiscalía General de la Nación al haberse retirado de la Fiscalía General de la Nación desde 01 DE ENERO DE 2019 presentando caducidad de la acción.” (Subraya destaca el Despacho).

**CONSIDERACIONES A LAS EXCEPCIONES PREVIAS Y MIXTAS PLANTEADAS POR  
LA NACIÓN - MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO y LA NACIÓN –  
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO**

**1. Excepción de Pleito Pendiente.**

En este aspecto, corresponde analizar previamente esta excepción atendiendo que de su fundamento se extrae que se refiere a **una solicitud de prejudicialidad**, que considera el apoderado debe aplicarse en el presente proceso.

Examinado el Código General del Proceso, Ley 1564 de 2012 respecto a la suspensión del proceso, se consagró lo siguiente:

*“Artículo 161 SUSPENSIÓN DEL PROCESO. El juez, a solicitud de parte, formulada antes de la sentencia, decretará la suspensión del proceso en los siguientes casos:*

- 1. Cuando la sentencia que deba dictarse dependa necesariamente de lo que se decida en “otro proceso judicial” que verse sobre cuestión que sea imposible de ventilar en aquel como excepción o mediante demanda de reconvención. El proceso ejecutivo no se suspenderá porque exista un proceso declarativo iniciado antes o después de aquel, que verse sobre la validez o la autenticidad del título ejecutivo, si en este es procedente alegar los mismos hechos como excepción.*

*“Artículo 162. DECRETO DE LA SUSPENSIÓN Y SUS EFECTOS. Corresponderá al juez que conoce del proceso resolver sobre la procedencia de la suspensión. **La suspensión a que se refiere el numeral 1 del artículo precedente solo se decretará mediante la prueba de la existencia del proceso que la determina** y una vez que el proceso que debe suspenderse se encuentre en estado de dictar sentencia de segunda o de única instancia. La suspensión del proceso producirá los mismos efectos de la interrupción a partir de la ejecutoria del auto que la decrete. El curso de los incidentes no se afectará si la suspensión recae únicamente sobre el trámite principal”. (Negritas fuera de texto).*

*“Artículo 163 REANUDACIÓN DEL PROCESO. La suspensión del proceso por prejudicialidad durará hasta que el juez decrete su reanudación, para lo cual deberá presentarse copia de la providencia ejecutoriada que puso fin al proceso que le dio origen; con todo, si dicha prueba no se aduce dentro de dos (2) años siguientes a la fecha en que empezó la suspensión, el juez de oficio o a petición de parte, decretará la reanudación del proceso, por auto que se notificará por aviso. Vencido el término de la suspensión solicitada por las partes se reanudará de oficio el proceso. También se reanudará cuando las partes de común acuerdo lo soliciten. La suspensión del proceso ejecutivo por secuestro del ejecutado operará por el tiempo en que permanezca secuestrado más un periodo adicional igual a este. En todo caso la*

*suspensión no podrá extenderse más allá del término de un (1) año contado a partir de la fecha en que el ejecutado recuperé su libertad”.*

En el presente asunto, advierte el Despacho, que se indicaron una serie de radicados a través de los cuales la parte demandada – La Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público- quiere dar a conocer los procesos en los cuales versan pretensiones fundamentadas en que la bonificación judicial, sea solamente liquidada como factor salarial, para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y Seguridad Social en Salud, asunto que, a su juicio se discute en el presente medio de control.

Sin embargo, tal referencia no constituye una verdadera prueba de la existencia de los mismos, pues si bien el Despacho puede realizar una consulta de los radicados en los distintos software de información o incluso en la página web de la Rama Judicial, tal situación, no permite evidenciar con claridad meridiana, la información concerniente a las pretensiones de las demandas, partes, estado de los procesos y en especial qué tipo de actos administrativos se encuentran siendo sometidos a control de legalidad a través del medio de control de nulidad simple.

El aporte de la prueba, carga procesal que le corresponde asumir a quien solicita la declaratoria de prejudicialidad, para lograr la suspensión del proceso, no puede ser trasladada al Despacho Judicial donde cursa el mismo, pues tal labor, no le corresponde a éste. Hubiese sido importante el aporte como mínimo de la copia de los libelos incoatorios, con el objetivo de determinar qué actos se encuentran siendo sometidos a control de legalidad, para con ello, poder efectuar un análisis minucioso que llevara a considerar si era pertinente o no, suspender el proceso.

Desafortunadamente con la nula información aportada, no es dable entrar a considerar la posibilidad de suspender el proceso, máxime que los efectos de la suspensión procesal peticionada generan un impacto inmediato en el trámite de este y por tanto, podrían poner en riesgo la celeridad debida que las partes reclaman en los procesos judiciales.

En esa medida, este Despacho considera que la solicitud de suspensión del proceso expuesta a través de un medio exceptivo, con fundamento en el numeral 1º de artículo 161 del Código General del Proceso no está llamada prosperar y será efectivamente negada.

**2 -. Falta de legitimación material en la causa por pasiva del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.**

Bien, para resolver la excepción planteada, resulta procedente examinar el contenido de los decretos a través de los cuales se previeron las funciones y competencias del Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Justicia como litisconsortes necesarios.

Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Decreto 4712 de 2008 artículo 3º.	Ministerio de Justicia y del Derecho. Decreto 1427 del 29 de agosto de 2017.
--	---

<p>1. Participar en la definición y dirigir la ejecución de la política económica y fiscal del Estado.</p> <p>2. Coordinar con la Junta Directiva del Banco de la República las políticas gubernamentales en materia financiera, monetaria, crediticia, cambiaria y fiscal.</p> <p>3. Preparar, para ser sometidos a consideración del Congreso de la República, los proyectos de acto legislativo y ley, los proyectos de ley del Plan Nacional de Desarrollo, del Presupuesto General de la Nación y en general los relacionados con las áreas de su competencia.</p> <p>4. Preparar los proyectos de decreto y expedir las resoluciones, circulares y demás actos administrativos de carácter general o particular, necesarios para el cumplimiento de sus funciones.</p> <p>5. Cumplir las funciones y atender los servicios que le están asignados y dictar, en desarrollo de la ley y de los decretos respectivos, las normas necesarias para el efecto.</p> <p>6. Coordinar, dirigir y regular la administración y recaudación de los impuestos que administra la Unidad Administrativa Especial, Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales; y regular de conformidad con la ley, la administración y recaudo de las rentas, tasas, contribuciones fiscales y parafiscales, multas nacionales y demás recursos fiscales, su contabilización y gasto.</p> <p>7. Preparar los proyectos para reglamentar el proceso de aforo, tasación y recaudo de los gravámenes arancelarios y los demás temas relacionados.</p> <p>8. Coordinar y preparar los proyectos para reglamentar la administración de los servicios aduaneros.</p>	<p>1. Articular la formulación, adopción, ejecución y evaluación de la política pública del Sector Administrativo de Justicia y del Derecho.</p> <p>2. Coordinar las relaciones entre la Rama Ejecutiva, la Rama Judicial, el Ministerio Público y los organismos de control para el desarrollo y consolidación de la política pública en materia de justicia y del derecho.</p> <p>3. Formular, adoptar, promover y coordinar las políticas y estrategias en: racionalización, reforma y defensa del ordenamiento jurídico; gestión jurídica pública del derecho; ejercicio de la profesión de abogado; socialización de la información jurídica; justicia transicional y restaurativa; y las que faciliten el acceso a la justicia formal y a la alternativa, en el marco del mandato contenido en las normas vigentes, al igual que las de lucha contra las drogas ilícitas, lavado de activos, corrupción, crimen organizado, enriquecimiento ilícito, administración de bienes incautados y acciones de extinción de dominio.</p> <p>4. Diseñar y coordinar las políticas para el ejercicio de la función jurisdiccional a cargo de autoridades administrativas y particulares, de conformidad con lo que disponga la ley, orientar la presentación de resultados y proponer el mejoramiento de las mismas.</p> <p>5. Diseñar, hacer seguimiento y evaluar la política en materia criminal, carcelaria y penitenciaria, en la prevención del delito y las acciones contra la corrupción y la criminalidad organizada.</p> <p>6. Promover las normas legales y reglamentarias, la protección jurídica, garantía y restablecimiento de los derechos de niños, niñas y adolescentes, en coordinación con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF - bajo los principios de interés superior, protección integral y enfoque diferencial, y las demás entidades competentes.</p>
--	---



	<div>7. Diseñar la política y promover los instrumentos aplicables dentro del sistema de responsabilidad penal para adolescentes, hacer seguimiento y evaluar su aplicación atendiendo su carácter especializado, su finalidad restaurativa y los acuerdos internacionales en la materia.</div> <div>8. Participar en el diseño de las políticas relacionadas con la protección de la fe pública en materia de notariado y registro.</div>
--	--

Pues bien, examinadas las funciones atrás referenciadas y los fundamentos fácticos de las demandas presentadas contra la Nación – Fiscalía General de la Nación, que ocupan la atención del Despacho, no se logra evidenciar la relación jurídico – procesal por pasiva, que permita determinar que los Ministerios de Hacienda y Crédito Público y de Justicia y del Derecho, sean los sujetos llamados a responder por las pretensiones que son objeto de controversia.

Tampoco se advierte, la participación real de las personas jurídicas vinculadas como litisconsortes necesarios, en los hechos, actos jurídicos o actos administrativos, que originaron la presentación de la demanda. Se considera que los Ministerios mencionados no tienen la legitimación material en la causa por pasiva, para poder responder por las pretensiones ni tampoco pueden esgrimir argumentos tendientes a defender la legalidad de los actos acusados, pues de ellos no se logra advertir que incidieran en su expedición o motivación.

Ahora bien, refuerza aún más la tesis de este Despacho advertir, que, la entidad demandada citada en el libelo incoatorio, esto es la Nación – Fiscalía General de la Nación, goza de personería jurídica propia, autonomía administrativa y, además expidió los actos acusados, por tanto, le asiste la competencia funcional para responder por las reclamaciones o pretensiones relacionadas con la aplicación del Decreto 382 de 2013.

Por lo antes expuesto **se declara probada la excepción de FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA** planteada por el litisconsorte necesario **La Nación- Ministerio de Hacienda y Crédito Público y La Nación – Ministerio de Justicia y del Derecho** con relación al presente proceso.

Esta declaratoria impone que no se examinen los restantes medios exceptivos planteados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, quedando conformado el extremo pasivo de la Litis, únicamente por la Nación – Fiscalía General de la Nación, respecto de la cual se realizará el análisis de las excepciones planteadas, conforme las consideraciones subsiguientes:

3. Prescripción

- En cuanto a la excepción de **prescripción** se tiene que, esta es una excepción que debe ser analizada al estudiar el fondo del asunto, pues se encamina a atacar las pretensiones de la demanda, por lo tanto, será resuelta al momento de decidir de fondo la presente Litis.

#### 4. Caducidad

Para resolver este medio exceptivo se tiene que, revisado el expediente, la señora Lyda Esther Valdiri Flórez, a través de apoderada judicial, presentó ante la parte demandada, derecho de petición el 15 de diciembre de 2015 (fl.1-5), resuelto con acto administrativo contenido en el Oficio 3371 del 23 de diciembre de 2015 (fl.6), el cual fue objeto de recurso de reposición y apelación presentado el 14 de enero de 2016 (fl. 10-14), habiéndose resuelto el recurso de reposición mediante Resolución 0186 del 10 de febrero de 2016 (fl. 15-1).

Así mismo se tiene que a través de la Resolución No. 2-1184 del 25 de abril de 2016, se resolvió el recurso de apelación, el cual fue notificado en la misma fecha. Presentó solicitud de conciliación el 29 de agosto de 2016 (fl. 21-23), la cual fue declarada fallida, según acta emitida el 2 de noviembre de 2016 (fl. 23-23 vto), a su vez, radicó la demanda el 8 de junio de 2018, conforme el acta de reparto que obra a folio 32 del expediente.

Así las cosas, para resolver la excepción de caducidad, se hace necesario ordenar la práctica de prueba necesaria que permita determinar si la demandante Lyda Esther Valdiri Flórez, para el 8 de junio de 2018, fecha de presentación de la demanda, se encontraba vinculada al servicio de la Fiscalía General de la Nación, devengando la bonificación judicial de que trata el Decreto 382 de 2013, máxime cuando la vocera judicial de la Fiscalía General de la Nación, al momento de plantear el medio exceptivo, mencionó dos fechas diferentes de la presunta desvinculación de la demandante, y omitió acreditar la constancia correspondiente.

Por lo anterior, el Despacho con fundamento en lo dispuesto en el inciso 2º del artículo 12 del Decreto 806 de 2020, ordenará la práctica de prueba necesaria para resolver la excepción de caducidad planteada por la parte demandada. Líbrese en consecuencia, oficio por Secretaría, dirigido al Jefe de Talento Humano de la entidad demandada o quien haga sus veces, para que allegue la correspondiente constancia, en la que se indique las fechas de ingreso y retiro del servicio de la señora LYDA ESTHER VALDIRI FLÓREZ, y de manera concreta deberá indicar si para el día 8 de junio de 2018 la citada demandante se encontraba vinculada laboralmente a la Fiscalía General de la Nación y en servicio activo.

La carga procesal de consecución de la prueba se impone a la apoderada de la Nación – Fiscalía General de la Nación, quien deberá desplegar las gestiones necesarias para que allegar la prueba respectiva con destino a este proceso antes de la celebración de la audiencia inicial.

Conforme con lo expuesto, la única excepción pendiente por resolver en el presente asunto, es la excepción de caducidad, que planteó la Nación – Fiscalía General de la Nación, misma que será decidida en desarrollo de la audiencia inicial, en aplicación del inciso segundo del artículo 12 del Decreto 806 de 2020<sup>1</sup>.

En tal sentido, se fijará fecha y hora para llevar a cabo audiencia inicial de que trata el artículo 180 de la Ley 1437 de 2011, en la cual se practicará la prueba que ha sido decretada y se resolverá sobre el medio exceptivo de caducidad.

Finalmente, se advierte que el proceso con radicado 110013335-026-2018-00396-00, cuenta con controversias de similares características a las del proceso de la referencia, se considera procedente, con fundamento en los principios de eficacia, economía y celeridad, realizar audiencia inicial concentrada de manera virtual, a través del link que se indicará en la parte resolutive del presente auto.

En mérito de lo expuesto, la suscrita Jueza del Juzgado Segundo Administrativo Transitorio de Bogotá - Sección Segunda -,

#### RESUELVE:

**Primero.** - Declarar probada la excepción previa de “Falta de legitimación en la causa por pasiva” planteada por la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la Nación - Ministerio de Justicia y del Derecho, conforme con la parte motiva de este proveído.

**Segundo.** - Declarar terminado el presente proceso respecto de los litisconsortes necesarios vinculados al presente proceso, esto es, respecto de la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la Nación - Ministerio de Justicia y del Derecho, y ordenar que el único extremo de la litis esté conformado por la Nación – Fiscalía General de la Nación, conforme con la parte motiva del presente auto.

**Tercero.** - Declarar que la excepción de “Prescripción del Derecho” planteada por la Nación – Fiscalía General de la Nación, será resuelta junto con el fondo del asunto, esto es, en la sentencia que ponga fin al proceso en esta instancia.

**Cuarto. – Decretar práctica de prueba** para resolver la excepción de caducidad, por lo cual, se ordena por Secretaría, emitir **oficio a la Dirección de Talento Humano de la Fiscalía General de la Nación**, o quien haga sus veces, para que, en el término de cinco (5) días contados a partir de la radicación del correspondiente oficio, allegue con destino al presente proceso:

**Certificación laboral actualizada**, en la que se indique de manera precisa, la fecha de ingreso y la fecha de retiro, si a ello hay lugar, de la demandante **LYDA ESTHER VALDIRI FLOREZ**, identificada con C.C. No. 41.605.551, como empleada de la Nación – Fiscalía

---

<sup>1</sup> “Las excepciones previas se formularán y decidirán según lo regulado en los artículos 100, 101 y 102 del Código General del Proceso. Cuando se requiera la práctica de pruebas a que se refiere el inciso segundo del artículo 101 del citado código, el juzgador las decretará en el auto que cita a la audiencia inicial, y en el curso de esta las practicará. Allí mismo, resolverá las excepciones previas que requirieron pruebas y estén pendientes de decisión. Las excepciones de cosa juzgada, caducidad, transacción, conciliación, falta de legitimación en la causa y prescripción extintiva, se tramitarán y decidirán en los términos señalados anteriormente.”

General de la Nación. De manera específica. De manera concreta deberá indicar si para el día 8 de junio de 2018 la citada demandante se encontraba vinculada laboralmente a la Fiscalía General de la Nación y en servicio activo.

Se insta a la **apoderada judicial de la Nación – Fiscalía General de la Nación**, para que, dentro de los 3 días siguientes a la remisión del oficio correspondiente, a través del correo electrónico aportado, proceda a tramitarlo, y acredite al expediente su gestión. Igualmente deberá colaborar con la aducción de la constancia solicitada, antes de la celebración de la audiencia inicial.

**Segundo. - Fijar** fecha y hora para llevar a cabo, de manera concentrada, audiencia inicial de que trata el artículo 18o del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, para el día: **jueves (10) de septiembre de 2020, a las 8:30 a.m.**, en relación a los expedientes descritos en la parte motiva de la presente providencia.

**Tercero. -** Advertir a los apoderados de las partes que el incumplimiento a la diligencia generará la aplicación de las sanciones previstas en el artículo 18o *ibidem*. Las partes deberán ingresar el día y hora señalada a través del enlace de la plataforma establecida, denominada: “Lifesize”: <https://call.lifesizecloud.com/4795088>.

**Noveno. - Reconocer** personería al(a) doctor(a) ANGÉLICA MARÍA LIÑAN GUZMÁN, identificada con la C.C. No. 51.846.018 expedida en Bogotá y portadora de la T.P. No. 110.021 del C.S.J., para actuar como apoderada judicial de la Nación – Fiscalía General de la Nación, en los términos y para los efectos del poder obrante a folio 116 del expediente, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 74 del C.G.P.

**Décimo. - Reconocer** personería al(a) doctor(a) JOSÉ SAÚL VALDIVIESO VALENZUELA, identificado(a) con la C.C. No. 1.085.281.870 y T.P. No. 262.541 del C.S. de la J, para que actué como apoderado(a) judicial de la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en los términos y para los efectos del poder obrante a folio 77, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 74 del C.G.P.

**Undécimo. - Reconocer** personería al(a) doctora PAOLA MARCELA DÍAZ TRIANA, identificado(a) con la C.C. No. 53.053.902 y T.P. No. 198.938 del C.S. de la J, para que actué como apoderado(a) judicial de la Nación – Ministerio de Justicia y del Derecho, en los términos y para los efectos del poder obrante a folio 87, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 74 del C.G.P.

**Duodécimo. -** Notifíquese la providencia con el uso de las tecnologías de la información, a las cuentas de correo que aparecen registradas en el expediente.

Parte	Dirección electrónica
Parte demandante: Ignacio Castellanos Anaya	<a href="mailto:ancasconsultoria@gmail.com">ancasconsultoria@gmail.com</a>

Parte demandada: Angélica María Liñán Guzmán	<a href="mailto:jur.notificacionesjudiciales@fiscalia.gov.co">jur.notificacionesjudiciales@fiscalia.gov.co</a> <a href="mailto:angelica.linan@fiscalia.gov.co">angelica.linan@fiscalia.gov.co</a>
Litisconsorte Ministerio de Hacienda y Crédito Público Ministerio de Justicia y del Derecho	<a href="mailto:notificacionesjudiciales@minhacienda.gov.co">notificacionesjudiciales@minhacienda.gov.co</a> <a href="mailto:notificaciones.judiciales@minjusticia.gov.co">notificaciones.judiciales@minjusticia.gov.co</a>

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.



CLAUDIA PATRICIA ALVARADO PACHÓN  
Jueza

Firmado Por:

CLAUDIA PATRICIA ALVARADO PACHON  
JUEZ CIRCUITO

JUZGADO 752 ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA ORAL DESCONGESTIÓN

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,  
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:  
0304e717cb74364310a7aca168de7c001e747929b6550149da4be6cecbe68d15

Documento generado en 24/08/2020 08:33:13 p.m.



**JUZGADO VEINTISÉIS ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD  
CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ D.C. SECCIÓN SEGUNDA**

Por anotación en **ESTADO ELECTRÓNICO** notifico a las partes  
la providencia anterior hoy **26 DE AGOSTO DE 2020**, a las  
ocho de la mañana (8:00 a.m.)

*LIZZETH CANGREJO*

**LIZZETH VIVIANA CANGREJO SILVA  
SECRETARIA**